

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

TÍTULO SEGUNDO
De los Procedimientos de Amparo

Capítulo I
El Amparo Indirecto

Sección Primera
Procedencia y Demanda

Artículo 106. El amparo indirecto procede:

I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales:

- a) Las derivadas de un procedimiento de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo en cuanto se reclamen vicios en dicho procedimiento;
- b) Los tratados internacionales;
- c) Las leyes federales;
- d) Las constituciones de los estados y el estatuto orgánico del Distrito Federal;
- e) Las leyes de los estados y del Distrito Federal;

f) Los reglamentos federales; y

g) Los reglamentos locales;

II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;

III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en cuyo caso procederá:

a) Contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de éstas últimas hubiere quedado total o parcialmente sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y

b) Contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten derechos sustantivos o constituyan violaciones procesales relevantes;

IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.

En los procedimientos de remate la última resolución la constituye aquella que lo apruebe o desapruebe, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;

V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten derechos sustantivos o constituyan violaciones procesales relevantes;

VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas cuando la ley no prevea a su favor algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificar o revocar esos actos, siempre que no se trate de juicio de tercería; y

VII. Contra las resoluciones de no ejercicio de la acción penal o desistimiento de la misma dictadas por el ministerio público.

Artículo 107. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito, en la que se expresará:

I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;

II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;

III. La autoridad responsable. En el caso de que se impugnen normas generales, se incluirá, además, a las que las hubieren promulgado;

IV. La norma general o acto que de cada autoridad se reclame;

V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;

VI. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame; y

VII. Los conceptos de violación.

Artículo 108. Cuando se promueve el amparo en los términos del artículo 14 de esta ley, bastará para la admisión de la demanda, que se exprese en ella:

I. El acto reclamado;

II. La autoridad que lo hubiere ordenado;

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

III. En su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso; y

IV. La autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto.

En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el órgano jurisdiccional de amparo.

La autoridad que conozca del juicio o aquella ante quien se hubiere promovido, mandará expedir las copias necesarias.

Artículo 109. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio.

El órgano jurisdiccional de amparo mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia o vía telegráfica, o la suspensión proceda de oficio y no se hubiere solicitado.

Artículo 110. Podrá ampliarse la demanda cuando:

I. No hayan transcurrido los plazos para su promoción, siempre que la autoridad responsable no hubiere rendido su informe con justificación;

II. Del informe con justificación aparezcan datos que no eran conocidos por el quejoso, en cuyo caso,

podrá presentar la ampliación dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del informe; y

III. Cuando con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los *actos reclamados en la primera demanda*. En este caso, la ampliación deberá promoverse dentro de los plazos previstos en el artículo 16.

En los casos de las fracciones II y III, la demanda podrá ampliarse siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional.

Sección Segunda

Substanciación

Artículo 111. *Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso turnada, el órgano jurisdiccional de amparo deberá resolver si desecha, previene o admite.*

Artículo 112. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

Artículo 113. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente la aclaración de la demanda, expresando en el auto relativo las deficiencias, irre-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

gularidades u omisiones que deban llenarse en los casos siguientes:

- I. Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;
- II. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 107;
- III. Si, en su caso, no se hubiere acompañado el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente;
- IV. Si no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y
- V. Si no se hubieren exhibido las copias necesarias.

Si el quejoso no subsana las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada.

Artículo 114. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional de amparo admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y, en su caso, ordenará la tramitación del incidente de suspensión.

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente la audiencia constitucional podrá

celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días.

Artículo 115. Al pedirse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al requerir el informe previo.

Al tercero interesado se le entregará copia de la demanda al notificársele del juicio. Si reside fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo se le notificará por medio de exhorto o despacho o, en caso de residir en zona conubarda, podrá hacerse por conducto del actuario.

Artículo 116. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación dentro del plazo improrrogable de diez días, con el cual se dará vista a las partes.

Los informes rendidos fuera de este plazo no serán tomados en cuenta. Además, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos a que se refiere el artículo 1o.

En el informe expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 117. Serán admisibles toda clase de pruebas excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Estas pruebas sólo serán tomadas en cuenta en el principal.

Las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial deberán ofrecerse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, del cuestionario para los peritos o de los puntos sobre que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Para su desahogo no son aplicables las reglas de la ley supletoria.

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.

El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cues-

tionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, y para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia.

Artículo 118. Al admitirse la prueba pericial, el órgano jurisdiccional que conozca del amparo hará la *designación de un perito* o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado. Tal designación deberá hacerse dentro de los tres días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba.

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el órgano jurisdiccional de amparo deberá excusarse de dictaminar cuando esté en alguno de los *impedimentos* a que se refiere el artículo 49. Al aceptar su nombramiento manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de esos impedimentos.

Artículo 119. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen obligación de expedirles, con toda oportunidad, las copias o documentos que aquéllas les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada, una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional de amparo que requiera a los omisos y éste *difierirá la audiencia*, siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia, y hará el requerimiento de que se le envíen directamente a él los documentos o copias, dentro de un plazo que no exceda de diez días.

Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional de amparo, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen y hará uso de los medios de apremio, consignando, en su caso, a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes.

Artículo 120. Si al presentarse un documento con anterioridad a la audiencia alguna de las partes lo considera falso, podrá impugnarlo incidentalmente en un plazo de tres días. Si la objeción se hiciera en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional de amparo la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 117, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contado a partir del día siguiente de la fecha de suspensión de la audiencia.

La calificación de la autenticidad o falsedad del documento sólo tendrá efectos dentro del juicio de amparo.

Artículo 121. Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquellas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan serlo con anterioridad o las que deban serlo vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal, fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del juicio.

Artículo 122. Las partes podrán comparecer a la audiencia si lo estiman pertinente. Abierta la misma, se procederá, en su caso, a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

Sección Tercera **Suspensión del Acto Reclamado**

Primera Parte **Reglas Generales**

Artículo 123. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso.

Artículo 124. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

peligro de privación de la vida, deportación, destierro, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales.

En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento.

Artículo 125. La suspensión procederá de oficio y se sujetará al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos:

I. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado; y

II. Cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen de propiedad ejidal o comunal.

Artículo 126. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias, siempre que concurren los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el quejoso;

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y

III. Que de permitirlo la naturaleza del caso, opere en favor del quejoso la apariencia de buen derecho.

La suspensión se tramitará en incidente por separado y duplicado.

Artículo 127. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión, se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinio, la producción o el comercio de narcóticos; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña contra el alcoholismo y la drogadicción; se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psí-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

quico o, cuando se trate del reclamo de imposición de pago de alimentos, así como en los demás casos análogos a los expresamente citados.

El órgano jurisdiccional de amparo podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en el párrafo anterior si, a su juicio, se pueda causar mayor afectación al interés social con la negativa de la medida suspensiva.

Artículo 128. Cuando al presentarse la demanda no se haya solicitado la suspensión, el quejoso podrá hacerlo en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

Artículo 129. Para conceder la suspensión no se exigirá al quejoso prueba del interés al que se refiere el artículo 4o., fracción I, en la promoción del amparo o en la del incidente, salvo que se trate de persona extraña al procedimiento del que emanó el acto reclamado, en cuyo caso será necesario que acredite, cuando menos, presuntivamente la afectación a ese interés.

Artículo 130. En los casos en que sea procedente la suspensión pero sus efectos puedan ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

Artículo 131. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo, o cuando la garantía se hubiere fijado discrecionalmente.

Artículo 132. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior, deberá cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá:

I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;

II. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria; y

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

III. Los gastos legales acreditados para constituir el depósito.

Artículo 133. Cuando el amparo se pida contra el cobro de créditos fiscales o contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Artículo 134. En los casos en que proceda, la suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. En su caso, dejará de surtirlos si el quejoso no otorga, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación, la garantía fijada.

En este último supuesto, queda expedita la facultad de la responsable para la ejecución del acto reclamado, debiendo notificarse personalmente el acuerdo relativo. No obstante, mientras no se produzca la ejecución, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual surtirá efectos la medida suspensiva.

Artículo 135. Sólo la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta ley exige.

En los casos a que se refiere el artículo 125, fracción II, no se requerirá de garantía para que surta efectos la suspensión.

Artículo 136. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional acordará lo siguiente:

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de setenta y dos horas; y

III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de veinticuatro horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda.

Artículo 137. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 126, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el órgano jurisdiccional de amparo, con la sola presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 138. En el informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y aquellas que permitan al órgano jurisdiccional de amparo establecer el monto de las garantías correspondientes. Las partes podrán objetar el contenido del informe previo en la audiencia.

En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones.

Artículo 139. Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de los medios a que se refiere el artículo anterior, se celebrará la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas. La resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes.

Artículo 140. En ningún caso se admitirá el informe previo que se rinda fuera del plazo concedido.

La falta de informe hará presumir cierto el acto reclamado, para el efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

Artículo 141. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 14, será admisible la prueba testimonial. Estas pruebas sólo serán tomadas en cuenta en el incidente.

No serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal.

Artículo 142. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos, se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes, se recibirán sus alegatos y se resolverá sobre la suspensión definitiva y las medidas y garantías a que estará sujeta.

Artículo 143. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el *incidente de suspensión*.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 144. La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener:

I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados;

II. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;

III. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión. El órgano jurisdiccional cuando la naturaleza del caso lo permita, deberá realizar un análisis ponderado entre los requisitos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 126; y

IV. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión, en congruencia con la parte considerativa. Si se concede, deberá precisar sus efectos para su estricto cumplimiento.

Artículo 145. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional de amparo deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensiva siga surtiendo efectos.

Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el órgano jurisdiccional ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser materialmente posible, restituirá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

El órgano jurisdiccional de amparo, tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.

Artículo 146. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.

En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.

Artículo 147. Cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensiva.

Artículo 148. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en el asunto que haya motivado el acto reclamado, a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, o sin materia al juicio de amparo.

Artículo 149. Cuando se promueva el amparo contra actos o resoluciones dictadas en un procedimiento de remate de inmuebles, la suspensión permitirá el curso del procedimiento hasta antes de que se ordene la escrituración al adjudicatario.

Tratándose de bienes muebles, el efecto de la suspensión será el de impedir su entrega material al adjudicatario.

Artículo 150. Tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral, la suspensión se concederá en forma tal que no se ponga a la parte trabajadora, si obtuvo laudo favorable, en peligro de no poder subsistir, mientras se resuelva el juicio de amparo, por lo cual sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.

Artículo 151. La resolución en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aunque se interponga recurso o se promueva el incidente de modificación o revocación; pero si con motivo del recurso o del incidente se concede, sus efectos se retrotraerán a la fecha del auto o interlocutoria correspondiente, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

Artículo 152. La suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión.

Se considerará hecho superveniente, entre otros, la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe previo.

En el caso, en que la suspensión se hubiere negado respecto de actos de aplicación de una norma general, el quejoso podrá promover la revocación o modificación de la resolución correspondiente, a efecto de que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo esté en aptitud de suspender o no el acto superveniente y, en su caso, establecer las condiciones y requisitos para que dicha suspensión surta sus efectos.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 153. Cuando se interponga recurso contra resoluciones dictadas en el incidente de suspensión, se remitirá el original al tribunal colegiado de circuito de amparo competente y se dejará el duplicado en poder del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sin perjuicio de que se siga actuando en el duplicado.

Artículo 154. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente.

Artículo 155. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las disposiciones conducentes relativas a la ejecución de las sentencias de amparo.

Artículo 156. En lo conducente, se aplicará al auto que resuelve sobre la suspensión provisional lo dispuesto para la resolución que decide sobre la suspensión definitiva.

Segunda Parte En Materia Penal

Artículo 157. En los lugares donde no resida juez de distrito y se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecuta o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y proveer sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas:

I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación, así como las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución;

II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del ministerio público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y

III. Remitirá el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, en tanto el juez le acusa recibo de aquéllas.

Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora.

Artículo 158. Cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, destierro o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal.

Artículo 159. Cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión tendrá por efecto que no se lleve a cabo.

Artículo 160. Cuando el acto reclamado consista en la orden de arraigo la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad que solicitó el arraigo y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigido.

De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que el arraigo se ejecute en el domicilio del quejoso.

Artículo 161. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal, dentro de un procedimiento del orden penal, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, continuando el procedimiento penal, en su caso.

Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, en relación con la investigación de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del ministerio público.

Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la investigación de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad, mediante las medidas de aseguramiento que en su caso procedan.

Artículo 163. Cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención o retención del mismo o por cualquier causa, la suspensión se concederá para que

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, o de noventa y seis tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento en que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, cese la detención poniéndolo en libertad o consignándolo ante el juez penal correspondiente.

Artículo 164. Cuando la privación de la libertad se lleve a cabo por virtud de orden de aprehensión, reaprehensión o auto de formal prisión, dictados por autoridad competente por delito que no sea considerado como grave, procederá la suspensión provisional y la definitiva.

En los actos a que se refiere el párrafo anterior, si se trata de delito considerado como grave, no procede la suspensión provisional. Excepcionalmente, de acuerdo con las circunstancias del caso, podrá concederse la suspensión definitiva.

En su caso, el efecto de la suspensión consistirá en que el quejoso sea puesto en libertad, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia, quede sujeto al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable para la continuación de la causa, en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.

Artículo 165. La libertad otorgada al quejoso con motivo de una resolución suspensiva podrá ser revocada

cuando éste incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por el órgano jurisdiccional de amparo o derivadas del procedimiento penal respectivo.

Artículo 166. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.

Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta:

I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute;

II. Sus características personales y situación económica; y

III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia.

Artículo 167. Cuando haya temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar la orden de libertad del quejoso o de ocultarlo, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacerlo comparecer ante él a través de los medios que estime pertinente o trasladarse al lugar de detención para ponerlo en libertad.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Capítulo II
El Amparo Directo

Sección Primera
Procedencia

Artículo 168. El juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. También se considerarán como sentencias definitivas, las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, siempre que la ley lo permita.

Para la procedencia del juicio, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo

podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con la consignación.

Artículo 169. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores e incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia.

Artículo 170. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo:

I. Cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;

II. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

III. Cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

IV. Cuando no se le concedan los plazos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley;

V. Cuando sin su culpa, se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;

VI. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos previa solicitud que haga, para poder alegar sobre ellos;

VII. Cuando se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión;

VIII. Cuando se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando la autoridad que conoce del juicio estando impedida o habiendo sido recusada, continúe conociendo del mismo, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; y

IX. Cuando se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los tribunales colegiados de circuito de amparo.

Artículo 171. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso:

I. Cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre de su acusador particular si lo hubiere;

II. Cuando no se le permita nombrar defensor en la forma que determine la ley; o no se le haga saber el nombre del defensor público o de oficio adscrito a la autoridad que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le permita hacer saber su nombramiento al defensor designado o se le impida comunicarse con él o bien que éste lo asista en alguna diligencia del proceso o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, no se le nombre al público o de oficio;

III. Cuando habiéndolo solicitado no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra;

IV. Cuando el juez actúe sin secretario o sin testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley;

V. Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando se haga en forma contraria a la ley, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admite en el acto de la diligencia, o cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga;

VI. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente ofrezca o no se reciban con arreglo a la ley;

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

VII. Cuando se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión;

VIII. Cuando no se le suministren los datos necesarios para su defensa;

IX. Cuando se celebre la audiencia de derecho, sin la asistencia de su defensor o sin la del juez que deba resolver, del secretario o testigos que deban autorizar el acto;

X. Cuando debiendo ser juzgado por un jurado, éste no se integre en los términos previstos en la ley, o se le juzgue por otro tribunal;

XI. Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el artículo 20, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que deba ser oído en defensa para que se le juzgue;

XII. Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de índole distinta a las señaladas por la ley;

XIII. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso fuere sentenciado por diverso delito.

No se considerará que el delito es diverso, cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se

refiera a los mismos hechos materiales que fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este último caso, el ministerio público haya formulado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante el juicio propiamente tal; y

XIV. Cuando se trate de casos análogos a las fracciones anteriores.

Artículo 172. En la demanda de amparo el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron, y precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo; de no hacerlo, se tendrán por consentidas.

El tribunal colegiado de circuito de amparo, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja.

Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, las mismas no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Sección Segunda
Demanda

Artículo 173. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán:

- I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;
- II. El nombre y domicilio del tercero interesado;
- III. La autoridad responsable;
- IV. El acto reclamado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia;

V. La fecha en que se hubiese notificado el acto reclamado al quejoso o aquélla en que hubiese tenido conocimiento del mismo;

VI. Los preceptos constitucionales y legales cuya violación se reclame; y

VII. Los conceptos de violación.

Artículo 174. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, acompañándose copia para cada una de las partes.

La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta ley.

Artículo 175. Cuando no se presenten las copias a que se refiere el artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Transcurrido dicho plazo sin que se haya subsanado esta omisión, remitirá la demanda con el informe relativo al tribunal colegiado de circuito de amparo, cuyo presidente la tendrá por no presentada. Si el presidente determina que no existe incumplimiento, o que éste no es imputable al quejoso, devolverá los autos a la autoridad responsable para que siga el trámite que corresponda.

En asuntos del orden penal o cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, la autoridad responsable mandará sacar las copias de oficio.

Artículo 176. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá:

I. Certificar al pie de la misma, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de presen-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

tación del escrito de demanda y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.

Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva, proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente;

II. Emplazar al tercero interesado, en el último domicilio que hubiere designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y

III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de emplazamiento a las partes, debiendo dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión.

Sección Tercera Substanciación

Artículo 177. El presidente del tribunal colegiado de circuito de amparo, deberá resolver en el plazo de veinticuatro horas si desecha, previene o admite la demanda por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Artículo 178. Si hubiere irregularidades en el escrito de demanda, por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 173, el presidente del tribunal colegiado de circuito de amparo señalará al promovente un término que no excederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa.

Si el quejoso no diere cumplimiento al requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable.

Artículo 179. Si el presidente del tribunal colegiado de circuito de amparo no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si éste último fuere subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten sus alegatos o la demanda de amparo adhesivo.

Artículo 180. La parte que hubiere obtenido sentencia favorable podrá promover amparo en forma adhesiva al que promueva su contraparte, el cual se tramitará en el mismo expediente. Su presentación y trámite se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal y seguirá la misma suerte procesal.

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo, podrán estar encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio que determinaron el resolutive

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

favorable a sus intereses, o impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Con los mismos alcances se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hubieren cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo.

Artículo 181. Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 180, dentro de las veinticuatro horas siguientes el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución, dentro de los treinta días siguientes. El auto de turno hace las veces de citación para sentencia.

Artículo 182. La lista de los asuntos que deban verse en cada sesión, se publicará en los estrados del tribunal cuando menos tres días antes de su celebración, sin contar el de la publicación ni el de la sesión misma.

Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen. Si fueren aprobados se procederá a la firma del engrose dentro de los diez días siguientes.

De no ser aprobados, los asuntos sólo podrán ser aplazados o ser retirados. En estos supuestos, se asentará a moción de quién y la causa y se volverán a listar dentro de un plazo que no excederá de treinta días naturales.

Artículo 183. El día señalado para la sesión, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de

resolución; el presidente pondrá a discusión cada asunto; se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados y estando suficientemente debatido, se procederá a la votación; acto continuo, el presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará la lista en los estrados del tribunal.

Artículo 184. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado que no estuviere conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de cinco días siguientes al de la firma del engrose, expresando los fundamentos del mismo.

Artículo 185. Si no fuere aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión.

Si el voto de la mayoría de los magistrados fuese en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia.

Artículo 186. Las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos sus integrantes y por el secretario de acuerdos, hecho lo cual, se notificará por lista al día siguiente.

Artículo 187. El órgano jurisdiccional de amparo, procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se estudiarán preferentemente.

Sección Cuarta **Suspensión del Acto Reclamado**

Artículo 188. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad; tratándose de materia laboral esta obligación corresponde al presidente de la junta respectiva.

Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 123, 126, 127, 128, 130 y 131.

Artículo 189. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, mandará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable, la cual deberá ponerlo en libertad caucional si la solicita y procediere.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

TÍTULO TERCERO
Cumplimiento y Ejecución

Capítulo I
Cumplimiento e Inejecución

Artículo 190. Cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el órgano jurisdiccional de amparo de primera o única instancia, según corresponda, la notificará sin demora a la autoridad responsable para su cumplimiento y a las demás partes para su conocimiento y efectos legales que estimen convenientes.

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse el cumplimiento de la ejecutoria por los medios oficiales de que dispongan las oficinas públicas de comunicaciones, o que existan en el propio órgano, de modo tal que se logre el cumplimiento de inmediato, sin perjuicio de comunicarla íntegramente por oficio.

En el oficio o medio de comunicación que se emplee, se prevendrá a las autoridades responsables que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia dentro del plazo de veinticuatro horas, si se trata de asuntos a los que se refiere el párrafo anterior y, de tres días en los restantes.

Artículo 191. Si la sentencia no quedare cumplida en el plazo a que se refiere el artículo anterior,

cuando la naturaleza del acto lo permita, o en caso contrario no se encontrare en vías de cumplimiento, el *órgano jurisdiccional que conoció del amparo de oficio o a petición de parte*, impondrá una multa a la autoridad responsable y requerirá al superior inmediato de ésta, para que la obligue a cumplir sin demora con la sentencia; si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella.

Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, aquel que de conformidad con la normatividad que rija a la institución pública correspondiente, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la ejecutoria de amparo, o bien para cumplir ésta por sí misma.

Artículo 192. Si a pesar de los requerimientos anteriores, no se obedeciere la ejecutoria, el órgano jurisdiccional de amparo impondrá una multa al superior de la autoridad responsable y hará la declaratoria en el sentido de que existe incumplimiento, y remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento.

La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

de las ejecutorias en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo.

El cumplimiento posterior de la ejecutoria, no exime a la autoridad responsable de la responsabilidad derivada de la falta de cumplimiento oportuno.

Artículo 193. Cuando el órgano jurisdiccional de amparo reciba informe de la autoridad responsable relativo al cumplimiento de la sentencia, dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, decidirá si se encuentra o no cumplida o en vías de cumplimiento; en amparo directo, resolverá si formalmente se encuentra cumplida. Si la tiene por incumplida remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo anterior.

Si el órgano jurisdiccional de amparo considera que la sentencia se encuentra en vías de cumplimiento, dará un plazo razonable para que éste se realice de manera total, y en caso de no lograrse procederá en términos del artículo anterior.

Artículo 194. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, aunque no hayan tenido el carácter de responsables, están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz

cumplimiento de la sentencia de amparo, y estarán sujetas a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo.

Artículo 195. También se considerará incumplimiento, cuando se retarde el cumplimiento de la ejecutoria por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución.

No se entenderá que la ejecutoria se encuentra cumplida ni en vía de ejecución si la autoridad ha llevado a cabo actos que, por su naturaleza estrictamente formal, su escasa trascendencia en la situación del quejoso, o su falta de contenido jurídicamente relevante frente al derecho violado, revele la intención de la autoridad de evadir los efectos restitutorios de la ejecutoria.

Artículo 196. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta dictará la resolución que corresponda.

Cuando estime que el incumplimiento es excusable, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla.

Cuando considere que es inexcusable, o hubiere transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, procederá a separar a la autoridad inmediatamente de su cargo y a declararla responsable por el delito contra

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

la administración de justicia. Se le dará vista por tres días, para que alegue por escrito lo que a sus intereses convenga, para efectos de la individualización de la pena y, hecho lo anterior, se le impondrá en el plazo de cinco días.

Capítulo II **Repetición del Acto Reclamado**

Artículo 197. La repetición del acto reclamado, podrá ser denunciada por la parte interesada ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual dará vista a las partes, para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga.

Hecho lo anterior, se dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, se ordenará la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 192. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto que se estime repetitivo, ello no la exime de responsabilidad.

Artículo 198. Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará, si existe o no repetición del acto reclamado.

En el primer supuesto, procederá a separar a la autoridad inmediatamente de su cargo y a declararla responsable por el delito contra la administración de justicia. Le dará vista por tres días, para que alegue

por escrito lo que a sus intereses convenga para efectos de la individualización de la pena y, hecho lo anterior, se le impondrá en el plazo de cinco días.

Si no hubiere repetición, hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano jurisdiccional que los remitió.

Capítulo III Inconformidad

Artículo 199. El incidente de inconformidad procede contra las siguientes resoluciones:

- I. Las que tengan por cumplida la ejecutoria de amparo;
- II. Las que declaren que existe imposibilidad material o jurídica para ejecutar la misma u ordenen el archivo definitivo del asunto; y
- III. Las que declaren sin materia o infundada la denuncia de repetición de los actos reclamados.

Artículo 200. La inconformidad, debe presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional de amparo que dictó la resolución impugnada, dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación. Transcurrido el plazo se tendrá por consentida la resolución.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 201. El órgano jurisdiccional de amparo, sin decidir sobre la admisión de la inconformidad, remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá allegándose los elementos que estime convenientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 192.

Capítulo IV Cumplimiento Sustituto

Artículo 202. El incidente de cumplimiento sustituto, tendrá por efecto, que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso.

Artículo 203. Cuando la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, éste podrá solicitar o la Suprema Corte de Justicia disponer de oficio su cumplimiento sustituto.

La solicitud del quejoso podrá presentarse en la vía incidental a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia y hasta antes de que se tenga por cumplida.

El órgano jurisdiccional de amparo resolverá lo conducente y en caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución.

Capítulo V
Incidente por Exceso o Defecto en la Ejecución
de Resoluciones de Amparo

Artículo 204. El incidente a que se refiere este capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por exceso o defecto en la ejecución de las resoluciones que hayan concedido la suspensión u otorgado el amparo.

Artículo 205. El incidente podrá promoverse por cualquier persona que resulte agraviada por la ejecución, en los plazos siguientes:

I. Tratándose de resoluciones que concedan la suspensión al quejoso, en cualquier tiempo mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo en el principal; y

II. En un año contado a partir del día siguiente de aquel en que surta sus efectos la notificación del auto por el cual se haga del conocimiento del quejoso los términos en que se haya dado cumplimiento a la sentencia, o al en que haya tenido conocimiento de la ejecución si se trata de persona extraña.

Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que impliquen privación de la vida, restricción a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, podrá hacerse valer en cualquier tiempo.

Artículo 206. El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes:

I. Se presentará ante el órgano jurisdiccional que conozca o haya conocido del juicio de amparo, acompañando copias para cada una de las partes;

II. El órgano jurisdiccional de amparo requerirá a la autoridad responsable para que rinda un informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y

III. Transcurrido dicho plazo, con informe o sin él, se citará a una audiencia que se celebrará dentro de las setenta y dos horas siguientes y se resolverá en el plazo de cinco días. En caso de que las partes únicamente hayan ofrecido pruebas documentales se omitirá la celebración de la audiencia.

Artículo 207. Si la autoridad responsable omite cumplir cabalmente con la sentencia que establece la existencia del exceso o defecto, dentro de las veinticuatro horas siguientes en el caso de la fracción I del artículo 205 o en los demás casos dentro de los tres días a que haya causado estado la resolución, el órgano jurisdiccional de amparo remitirá el expediente

a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicándose, *en lo conducente*, las disposiciones de este título.

Capítulo VI

Incidente por Incumplimiento de la Declaración General de Inconstitucionalidad o de Interpretación Conforme

Artículo 208. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaración general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, se aplica la norma general inconstitucional o se le da un sentido diverso al establecido en la declaración correspondiente, el afectado podrá hacer valer los medios de defensa que establece este título ante el juez de distrito competente de acuerdo con las reglas establecidas en el capítulo V, del título primero.

Capítulo VII

Disposiciones Complementarias

Artículo 209. Lo dispuesto en este título debe entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional de amparo haga cumplir la sentencia de que se trate dictando las órdenes necesarias; si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez o servidor público se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Para los efectos de esta disposición, el juez o servidor público designado podrá salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo.

Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado, mediante el procedimiento que establezca la ley; pero si se tratare de la libertad personal, en la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda dentro de un término que no podrá exceder de tres días, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones, darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta disposición.

Artículo 210. Si el pleno o la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concedió el amparo no obtuviere el cumplimiento de la sentencia respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al juez de distrito o tribunal colegiado que corresponda, los que se sujetarán a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables.

Artículo 211. En los incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia en la vía y a los argumentos hechos valer por el promovente.

Artículo 212. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

TÍTULO CUARTO
Jurisprudencia y Declaración General de
Inconstitucionalidad o de Interpretación
Conforme

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 213. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios o por contradicción de tesis.

Artículo 214. La jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito de amparo.

La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 215. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decreta el pleno, y además para los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

La que establezcan los tribunales colegiados de circuito de amparo es obligatoria para los órganos men-

cionados en el párrafo anterior, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 216. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito de amparo establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva que deberá contener:

I. La relación sucinta de los hechos del asunto del que deriva;

II. La identificación de la norma general respecto de la cual se establezca el criterio;

III. Las consideraciones interpretativas, mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya determinado el sentido y los alcances de la norma correspondiente; y

IV. El rubro, los datos de identificación del asunto, número de tesis, órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el criterio y la tesis y, en su caso, en los asuntos de los cuales derive la misma.

Artículo 217. El pleno, la sala o el tribunal colegiado deberán remitir las tesis en el plazo de quince días al Semanario Judicial de la Federación, para su publicación.

Artículo 218. En el Semanario Judicial de la Federación se publicarán las tesis que reciba, y se distribuirán en forma eficiente para facilitar su conocimiento.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Igualmente, publicará las ejecutorias de amparo y los votos particulares, siempre que se trate de los necesarios para constituir jurisprudencia o para interrumpirla, así como los que los órganos jurisdiccionales competentes le envíen para tal fin.

Artículo 219. Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de su identificación y publicación.

Capítulo II

Jurisprudencia por Reiteración de Criterios

Artículo 220. La jurisprudencia por reiteración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, con el voto aprobatorio de por lo menos ocho ministros.

Artículo 221. La jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, con el voto aprobatorio de por lo menos cuatro ministros.

Artículo 222. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno, y por cuatro, si es de

sala. En estos casos, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa.

Artículo 223. Para la sustitución de la jurisprudencia, se observarán las mismas reglas establecidas para su formación.

Artículo 224. Las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cualquiera de sus ministros, o bien los tribunales colegiados de circuito de amparo o cualquiera de sus integrantes, con motivo de un caso concreto podrán pedir al pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que interrumpa o sustituya la jurisprudencia establecida, expresando las razones por las cuales se estima debe hacerse.

El pleno o la sala correspondiente resolverán si sustituyen la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas, derivadas de los juicios en los que se hubieren dictado las sentencias que la integraron. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta ley.

Artículo 225. Tratándose de amparos contra normas generales en revisión, en los que, con motivo de los acuerdos generales a que se refiere el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tribunales colegiados de circuito de amparo deban conocer de ellos por haberse establecido

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia, los propios tribunales colegiados, de oficio o a petición de parte, cuando hubiere razones fundadas para ello, podrán solicitar al pleno o a las salas de la Suprema Corte de Justicia que ejerzan su competencia originaria, a fin de interrumpir o sustituir la jurisprudencia correspondiente.

Una vez recibida la solicitud se turnará a un ministro a fin de que formule el proyecto de resolución. El pleno o la sala podrá declarar interrumpida o sustituida la jurisprudencia, o desechar la solicitud planteada.

Artículo 226. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito de amparo deberán observarse los requisitos señalados en este capítulo, salvo el de la votación que deberá ser unánime.

Capítulo III

Jurisprudencia por Contradicción de Tesis

Artículo 227. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios opuestos sostenidos por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre sí; o los tribunales colegiados de circuito de amparo, en los asuntos de su competencia respecto de otros órganos jurisdiccionales de amparo de igual categoría.

Artículo 228. Las contradicciones de tesis entre las salas de la Suprema Corte de Justicia serán resuel-

tas por el pleno; las de los tribunales colegiados de circuito de amparo serán resueltas por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia, según la materia. En ambos casos deberán ser aprobadas por mayoría simple.

Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios opuestos u optar por uno nuevo, o bien declararla inexistente o sin materia.

La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

Artículo 229. Estarán legitimados para denunciar la contradicción de tesis los ministros, los órganos que sustentaron los criterios, sus integrantes y las partes en los asuntos que los motivaron.

Artículo 230. Si al tramitarse una contradicción de tesis se advierte, que sobre el criterio debatido existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe declararse sin materia y notificarse la resolución respectiva a los órganos jurisdiccionales que sostuvieron los criterios contradictorios.

Artículo 231. Si a juicio de alguno de los ministros existen razones fundadas para ello, podrá solicitar al pleno o a las salas de la Suprema Corte de Justicia,

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

según corresponda, la sustitución de la jurisprudencia por contradicción.

Capítulo IV
Declaración General de Inconstitucionalidad o
de Interpretación Conforme

Artículo 232. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad o se establezca la interpretación conforme de una norma general respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procederá a hacer la declaratoria general correspondiente.

Artículo 233. Dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la aprobación de la jurisprudencia referida en el artículo anterior, la Suprema Corte de Justicia formulará la declaratoria general de inconstitucionalidad o bien de interpretación conforme. Previo a la declaración, podrá convocar a quien estime conveniente para oír sus puntos de vista sobre los alcances de aquélla.

Artículo 234. La declaratoria no podrá modificar el sentido de la jurisprudencia y establecerá:

- I. La fecha de su entrada en vigor;
- II. Su obligatoriedad general; y

III. Los alcances y las condiciones de la interpretación conforme o de la declaración de inconstitucionalidad.

Los efectos de estas declaraciones no serán retroactivos, salvo en materia penal en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 235. Las declaraciones generales de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, se publicarán en el *Semanario Judicial de la Federación*, en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma general respectiva.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

TÍTULO QUINTO
Medidas Disciplinarias y de Apremio,
Responsabilidades y Sanciones

Capítulo I
Medidas Disciplinarias y de Apremio

Artículo 236. Para mantener el orden y exigir respeto los órganos jurisdiccionales de amparo podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, previo apercibimiento, las siguientes medidas disciplinarias:

I. Multa; o

II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado.

Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones los tribunales, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio:

I. Multa;

II. Auxilio de la fuerza pública; y

III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del ministerio público por la probable comisión de los delitos que resulten, en caso de haber flagrancia;

en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la propia representación social.

Capítulo II

Responsabilidades y Sanciones

Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.

Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día.

Artículo 239. No se aplicarán las multas establecidas en esta ley cuando el quejoso impugne cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 240. En el caso del artículo 10, si quien promueve no tiene la representación que afirma, se le impondrá multa de treinta a trescientos días, independientemente de que se dé vista al Ministerio Público Federal por la posible comisión de delito de falsedad.

Artículo 241. En el caso del párrafo tercero del artículo 15, a quien tiene conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado y no lo comunica

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

oportunamente al órgano jurisdiccional de amparo, se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 242. En el caso de los artículos 19, párrafo segundo, y 22, si los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o transmitir los mensajes de referencia, se les impondrá multa de cien a mil días, independientemente de que se dé vista al ministerio público federal por la posible comisión de delito de desobediencia.

Artículo 243. En el caso del artículo 26, fracción III, inciso b), a la autoridad responsable que no proporcione el domicilio del tercero interesado, se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 244. En el caso del artículo 27, fracción I, a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 245. En el caso del artículo 27, fracción II, si el encargado de la oficina de correos no envía el oficio de referencia se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 246. En los casos de los artículos 30 y 66, al servidor público que practique una notificación nula se le impondrá multa de treinta a trescientos días. En caso de reincidencia será destituido del cargo.

Artículo 247. En el caso del artículo 50, si la recusación resulta notoriamente infundada, se impon-

drá a la parte que la promueva, a su abogado o a ambos, multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 248. En el caso del artículo 62, a quien tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunica, se le impondrá multa de diez a cien días.

Artículo 249. En el caso del párrafo tercero del artículo 66, cuando se promueva una nulidad notoriamente improcedente se impondrá a la parte que promueva, a su abogado o a ambos, multa de cincuenta a quinientos días.

Artículo 250. En el caso del párrafo segundo del artículo 70, al responsable de la pérdida de constancias se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 251. En el caso del artículo 119, si la autoridad no expide las copias o documentos solicitados por las partes o los expide incompletos o ilegibles se le impondrá multa de cincuenta a quinientos días; si a pesar de la solicitud del órgano jurisdiccional de amparo, no los remite, los remite incompletos o ilegibles se le impondrá multa de cien a mil días y se le consignará por el delito de desobediencia.

Artículo 252. En el caso del artículo 143, se impondrá a la parte que promueva, a su abogado o a ambos, multa de cincuenta a quinientos días.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 253. En el caso del artículo 189, si la autoridad responsable no decide sobre la suspensión en el plazo señalado se le impondrá multa de cien a mil días.

Artículo 254. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 será de cien a mil días.

Artículo 255. En el caso de los artículos 235, fracción I, y 236, fracción I, la multa aplicable será de cincuenta a quinientos días.

Artículo 256. Se sancionará con multa de cincuenta a quinientos días a la autoridad responsable que:

I. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional;

II. No informe o remita, en su caso, la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, a la presentación de la demanda y a los días inhábiles que mediaron entre uno y otro acto; y

III. No tramite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta ley las constancias que le fueren solicitadas por la propia autoridad de amparo o por las partes en el juicio constitucional.

Artículo 257. La autoridad responsable que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión rinda informe en el que afirme una falsedad o niegue la verdad, en todo o en parte, se le sancionará con pena de tres a siete años de prisión, de cincuenta a quinientos días multa, destitución e inhabilitación de uno a seis años, para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.

Artículo 258. La autoridad responsable que revocare el acto reclamado, con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en dicho acto, se le impondrá de tres a diez años de prisión, de setenta a setecientos días multa, destitución e inhabilitación de uno a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.

Artículo 259. La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra.

Artículo 260. La autoridad responsable que en los casos de suspensión admita fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada en los términos previstos por el Código Penal Federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Artículo 261. Fuera de los casos señalados en los artículos anteriores, cuando la autoridad responsable se resista a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictados en materia de amparo será sancionada en la forma precisada en el Código Penal Federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia, por los actos u omisiones ahí previstos.

Artículo 262. Siempre que al concederse definitivamente al quejoso el amparo de la justicia federal apareciere que la violación de garantías cometida constituye delito, se hará la consignación del hecho al ministerio público.

Artículo 263. Los jueces de distrito, las autoridades judiciales de los estados, del Distrito Federal, cuando actúen en auxilio de la justicia federal, los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, los magistrados de circuito y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son responsables en los juicios de amparo por las faltas y delitos que cometan, ya en la substanciación de éstos, ya en las sentencias, en los términos que los definen y castigan el Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como este capítulo.

Artículo 264. El juez de distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, que no suspenda el acto reclamado

cuando se trate de peligro de privación de la vida, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si se llevare a efecto la ejecución de aquél, será consignado por el delito de abuso de autoridad, conforme a las disposiciones del Código Penal Federal.

Si la ejecución no se llevare a efecto por causas ajenas a la intervención de la justicia federal, se le impondrá la sanción que señale el mismo código para los delitos cometidos contra la administración de justicia.

Artículo 265. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, si la procedencia de la suspensión fuere notoria y el juez de distrito que conozca del incidente no la concediere por negligencia o por motivos inmorales, y no por simple error de opinión, se impondrá la sanción que fija el Código Penal Federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia.

Artículo 266. La sanción a que se refiere el precepto precedente se aplicará igualmente al juez de distrito o autoridad que conozca del juicio, en cualquiera de los casos siguientes:

I. Cuando excarcele al quejoso contra lo prevenido en las disposiciones aplicables de esta ley, sin perjuicio de la pena que corresponda y que aplicará por

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

separado la autoridad competente, si con la excarcelación se cometiere otro delito;

II. Cuando por no dar curso oportuno a las promociones que por su conducto se hagan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;

III. Cuando sin motivo justificado se suspenda o difiera la audiencia constitucional; y

IV. Cuando fuera de los casos permitidos por esta ley decrete la suspensión del acto reclamado, aunque sea con el carácter provisional, y por virtud de ella se produzca un daño o se conceda una ventaja indebidos.

Artículo 267. La falta de cumplimiento de las ejecutorias de amparo imputables a los jueces de distrito, o a las autoridades judiciales que conozcan del juicio, se castigarán con arreglo a las disposiciones del Código Penal Federal como responsables del delito de abuso de autoridad.

Artículo 268. La imposición de cualquiera pena privativa de la libertad por causa de responsabilidad, importa la destitución de empleo y suspensión de derechos para obtener otro cargo público por un término hasta de cinco años.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los juicios de amparo que se encuentren pendientes de resolver a la entrada en vigor de la presente ley continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que se encontraban vigentes al inicio de los mismos.

TERCERO. El cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, cualquiera que sea el estado del procedimiento, se regirá por lo dispuesto en esta ley.

CUARTO. La jurisprudencia obligatoria a la entrada en vigor de la presente ley continuará vigente en lo que no se oponga a lo dispuesto en la misma.

QUINTO. Para la integración de jurisprudencia por reiteración de criterios conforme al sistema de esta ley, no se tomarán en cuenta las resoluciones dictadas con anterioridad.

SEXTO. La jurisprudencia obligatoria por contradicción de tesis a la entrada en vigor de la presente ley podrá ser sustituida en términos del artículo 230.

SÉPTIMO. En tanto los actuales tribunales unitarios de circuito no sean convertidos en colegiados de cir-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

cuito de apelación, las referencias que en esta ley se hace a éstos se entenderán hechas a aquéllos.

OCTAVO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán dictar las medidas necesarias para que a partir de la entrada en vigor de la presente ley las oficialías de partes funcionen hasta las doce de la noche.

NOVENO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán dictar las medidas necesarias para la efectividad e inmediato cumplimiento de la presente ley.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

**ÍNDICE DEL PROYECTO DE LEY DE AMPARO
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**TÍTULO PRIMERO
Reglas Generales**

	Página
Capítulo I	
Disposiciones Fundamentales	73
Capítulo II	
Capacidad y Personería	74
Capítulo III	
Plazos	80
Capítulo IV	
Notificaciones	84
Capítulo V	
Competencia	91
Sección Primera	
Reglas de Competencia	91
Sección Segunda	
Conflictos Competenciales	94
Capítulo VI	
Impedimentos, Excusas y Recusaciones	101

Capítulo VII	
Improcedencia	106
Capítulo VIII	
Sobreseimiento	111
Capítulo IX	
Incidentes	112
Sección Primera	
Nulidad de Notificaciones	113
Sección Segunda	
Reposición de Constancias de Autos	114
Capítulo X	
Sentencias	115
Capítulo XI	
Medios de Impugnación	119
Sección Primera	
Recurso de Revisión	119
Sección Segunda	
Recurso de Queja	127
Sección Tercera	
Recurso de Reclamación	131

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

TÍTULO SEGUNDO
De los Procedimientos de Amparo

Capítulo I	
El Amparo Indirecto	133
Sección Primera	
Procedencia y Demanda	133
Sección Segunda	
Substanciación	138
Sección Tercera	
Suspensión del Acto Reclamado	144
Primera Parte	
Reglas Generales	144
Segunda Parte	
En Materia Penal	158
Capítulo II	
El Amparo Directo	163
Sección Primera	
Procedencia	163
Sección Segunda	
Demanda	169
Sección Tercera	
Substanciación	171

Sección Cuarta	
Suspensión del Acto Reclamado	175

TÍTULO TERCERO

Cumplimiento y Ejecución

Capítulo I	
Cumplimiento e Inejecución	177
Capítulo II	
Repetición del Acto Reclamado	181
Capítulo III	
Inconformidad	182
Capítulo IV	
Cumplimiento Sustituto	183
Capítulo V	
Incidente por Exceso o Defecto en la Ejecución de Resoluciones de Amparo	184
Capítulo VI	
Incidente por Incumplimiento de la Declaración General de Inconstitucionalidad o de Interpre- tación Conforme	186
Capítulo VII	
Disposiciones Complementarias	186

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

TÍTULO CUARTO
Jurisprudencia y Declaración General de
Inconstitucionalidad
o de Interpretación Conforme

Capítulo I	
Disposiciones Generales	189
Capítulo II	
Jurisprudencia por Reiteración de Criterios..	191
Capítulo III	
Jurisprudencia por Contradicción de Tesis ...	193
Capítulo IV	
Declaración General de Inconstitucionalidad o de Interpretación Conforme	195

TÍTULO QUINTO
Medidas Disciplinarias y de Apremio,
Responsabilidades y Sanciones

Capítulo I	
Medidas Disciplinarias y de Apremio	197
Capítulo II	
Responsabilidades y Sanciones	198
ARTÍCULOS TRANSITORIOS	206

**PROYECTO DE REFORMAS A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

**PROYECTO DE REFORMAS A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS**

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados de Circuito y en Juzgados de Distrito.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán privadas.

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia está facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que compete conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del

Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

...

...

...

Artículo 100. ...

...

...

...

...

...

...

...

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, en su contra no procede juicio ni recurso alguno, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, cambio de adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adop-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

tadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

...

Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales o actos de autoridad que violen las garantías que consagra esta Constitución y los derechos humanos que protegen los tratados internacionales generales en la materia.

Artículo 105. ...

I a II. ...

III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito de Apelación o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

...

...

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia del titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre que el acto reclamado viole las garantías o los derechos previstos en el artículo 103 y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su propia situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

II. La sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de personas particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la norma general o acto que la motivare.

Cuando la Suprema Corte de Justicia establezca jurisprudencia en la que se resuelva que una norma general es inconstitucional o determine una interpretación conforme con la Constitución, emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad o la de interpretación conforme, en la cual fijará sus alcances y condiciones en términos de la ley reglamentaria.

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria;

III. ...

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

Para la procedencia del juicio, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores e incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia;

b) Contra actos o resoluciones en juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten derechos sustantivos o constituyan violaciones procesales relevantes; cometidas fuera de

juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y

c) ...

IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria prevé para decretar esa suspensión; independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley reglamentaria.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito de Amparo que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

a) a d) ...

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

La Suprema Corte de Justicia de oficio podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el trámite y los términos, en su caso, en que la Suprema Corte de Justicia habrá de dictar sus respectivas resoluciones;

VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos de autoridad administrativa, se promoverá ante el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito de Apelación bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, deba ejecutarse, trate de ejecutarse o se haya ejecutado, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Circuito de Apelación procede revisión.

De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

La Suprema Corte de Justicia podrá conocer de oficio de los amparos en revisión que por su interés y trascendencia lo ameriten.

Salvo disposición expresa en la ley reglamentaria, en los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la constitucionalidad de una norma general o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la *apariencia de buen derecho* y del *interés social*.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comuni-

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

carce la promoción del amparo, y en las demás materias, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado, la cual quedará sin efecto si éste da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. El quejoso deberá presentar la demanda de amparo directo ante la propia autoridad responsable. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Colegiados de Circuito de Apelación;

XII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito de Apelación no residieren en el mismo lugar de la autoridad responsable, y se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de esta Constitución así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, la ley determinará el órgano jurisdiccional del fuero común ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que deberá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los términos que la misma ley establezca;

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito de Amparo sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros, cualquiera de los órganos que sustentaron los criterios, sus integrantes o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron establecidas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de aquéllas, sus integrantes o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

...

XIV. El Procurador General de la República o el agente del ministerio público federal que al efecto designare, será parte en los juicios de amparo contra normas generales, en términos de la ley reglamentaria;

XV. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

el incumplimiento, dicha autoridad y cualquiera otra que con motivo de sus funciones esté obligada al cumplimiento de la sentencia de amparo, será inmediatamente separada de su cargo por la Suprema Corte que le aplicará las penas que correspondan al delito contra la administración de justicia previsto en el Código Penal Federal.

Si el incumplimiento fuere excusable, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia; si la autoridad no cumple en el plazo concedido, procederá en los términos del párrafo anterior.

Para individualizar la sanción, la Suprema Corte otorgará a la autoridad de que se trate la garantía de audiencia, en los términos que se señale en la ley reglamentaria.

Este procedimiento se aplicará también tratándose del incumplimiento a la declaración general de inconstitucionalidad o de interpretación conforme y de resoluciones que otorguen la suspensión del acto reclamado.

Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia podrá disponer de oficio o a petición del quejoso el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; y

XVI. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente. En estos dos últimos casos, la responsabilidad civil de la autoridad será solidaria con el que ofreciere la fianza y el que la prestare.

Artículo 112. ...

...

Tampoco se requerirá declaración de procedencia cuando la Suprema Corte de Justicia ejerza la facultad a que se refiere la fracción XV del artículo 107.

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

ÍNDICE GENERAL

	Página
Presentación	7
Oficio dirigido a la Comunidad Jurídica Mexicana por el Ministro Genaro David Góngora Pimentel, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación	11
Oficio dirigido a la Comunidad Jurídica Mexicana por el Ministro Humberto Román Palacios, Coordinador General de la Comisión de Análisis de Propuestas para una nueva Ley de Amparo	13
Informe del Ministro Humberto Román Palacios, Coordinador General de la Comisión de Análisis para una nueva Ley de Amparo	19
Anexo 1. Propuestas correlacionadas por artículo de la Ley de Amparo	29
Anexo 2. Análisis numérico de artículos de la Ley de Amparo	39
Anexo 3. Foros de análisis realizados en las Casas de la Cultura Jurídica	

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación	41
Introducción al proyecto de "Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"	45
Proyecto de Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	73
Proyecto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	217
Índice General.....	229

**BIBLIOTECA DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION**

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

NOTAS

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

PROYECTO DE LEY DE AMPARO

Esta obra se terminó de editar
el 4 de septiembre de 2000, y se imprimió en
Gama Sucesores, S.A. de C.V.
La edición consta de 10,000 ejemplares.